

3.1. TABLA 1. MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS DIGITALES³⁸

Guatemala	Honduras	El Salvador	Nicaragua	Costa Rica
Derecho a la Privacidad Digital³⁹ y la Inviolabilidad de las Comunicaciones				
Art. 24: inviolabilidad de correspondencia, documentos o libros y se garantiza el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones.	Art. 76: derecho al honor, la intimidad personal, familiar y a la propia imagen. Art. 100: derecho a la inviolabilidad y secreto de las comunicaciones.	Art. 2: derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen. Art. 24: se prohíbe la interferencia y la intervención de las telecomunicaciones.	Art. 27: 5) derecho a la vida privada y familiar. 6) derecho al respeto de la honra y reputación. 8) inviolabilidad del domicilio, correspondencia y comunicaciones.	Art. 24: derecho a la intimidad, la libertad y el secreto de las comunicaciones. Derecho fundamental de acceso a las telecomunicaciones y las TIC.
Derecho a la Libertad de Expresión en Línea				
Art. 35: derecho a la libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa y sin restricción por ley o disposición alguna.	Arts. 72-74: derecho a la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura, libertad de prensa y la no restricción.	Art. 6: toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos y el ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución.	Art. 30: derecho a expresar libremente el pensamiento en público/privado, siempre y cuando no trasgreda los principios de seguridad, paz y bienestar.	Art. 29: todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura.
Derecho de Acceso a la Información y Petición de la Información				
Arts. 28-31: derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad y el derecho de acceso a información sobre registros estatales.	Derecho de acceso a la información se deriva de los Arts. 72-74 . Art. 182: garantía del Hábeas Data. Art. 80: presentar peticiones a las autoridades.	Derecho de acceso a la información se deriva de los Arts. 6 y 18 . Art. 18: derecho a dirigir peticiones por escrito a las autoridades.	Art. 60: derecho a la información, comprende la libertad de buscar, recibir y difundir ideas e información por cualquier medio. Art. 176: recurso de Habeas Data, garantía de tutela de datos.	Arts. 27 y 30: se garantiza el derecho a la libertad de petición y acceso a la información pública.

³⁸ Constitución Política de Guatemala, 1985; Constitución de la República de Honduras, 1982; Constitución de la República de El Salvador; Constitución Política de la República de Nicaragua, 1986 y reformas constitucionales de 2025; y Constitución Política de Costa Rica de 1949.

³⁹ Peri L. (2016). “El derecho a la privacidad digital. Análisis de los marcos legales de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua”. *Cuaderno Jurídico y Político*, Vol. 2, N. 5.

3.2. TABLA 2. MARCO LEGAL SECUNDARIO SOBRE DERECHOS DIGITALES

Guatemala	Honduras	El Salvador	Nicaragua	Costa Rica
Protección de Datos Personales y Derechos ARCO-POL				
Ley de Acceso a la Información Pública Art. 1: derecho a conocer, proteger y actualizar los datos personales. Art. 30: garantía de Hábeas Data. Art.31-35: consentimiento expreso y de excepción, el acceso, tratamiento y denegación expresa de los datos personales. Art. 46: autoridad reguladora, PGD. *Manejo de datos sólo en el ámbito de registros y archivos públicos o estatales.	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Art. 4: deber de informar y al acceso a la información pública. Arts. 8-11: ente regulador, IAIP. Art. 23: garantía de Hábeas Data. Art. 24: sistematización de archivos personales y su acceso.	Ley de Datos Personales Art.7: ente regulador, la Agencia ACE. Art.7: derecho a solicitar información. Arts. 8-14: derechos del titular, ARCO-POL. Arts. 56-58: sanciones administrativas. Ley de Inteligencia Artificial (IA) Arts. 22-23: protección de datos personales y propiedad intelectual en el desarrollo de la IA.	Ley de Protección de Datos Personales y Reglamento N.36-2012 Art. 10: derecho al olvido digital. Art. 16: derecho a solicitar información. Art. 17: derechos del titular, ARCO. Arts. 28-29: ente regulador y sancionador, DIPRODAP. Art 46: sanciones de carácter administrativo.	Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus Datos Personales Art. 5: derecho a la autodeterminación informativa. Art. 7: derechos del titular, ARCO. Arts. 15: entidad reguladora, PRODHAB. Art. 28: sanciones de carácter administrativo.
Tipificación del Delito Informático y Conexos				
Código Penal de 1973 y reformas legislativas, Delitos Informáticos Art. 274 A-C: destrucción de registros informáticos, alteración de programas y reproducción de programas de computación. Art. 274 D-G: registros prohibidos, manipulación de Información, el uso no autorizado de información y de programas destructivos.	Código Penal de 2019, Delitos Informáticos Arts. 398-399: acceso no autorizado y daño a sistemas informáticos. Art. 400: abuso de dispositivos. Art. 401: suplantación de identidad. Art. 592: ciberterrorismo o terrorismo electrónico.	Ley Contra Delitos Informáticos y Conexos Marco penal que tipifica, previene y sanciona delitos cometidos mediante sistemas digitales, como la estafa y fraude informático, así como el espionaje y el uso indebido de datos.	Ley Especial de Ciberdelitos y reforma de 2024 Marco penal para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las TIC con alcance en redes sociales y su aplicación extraterritorial. Código Penal: tipifica expresamente los ciberdelitos.	Código Penal, Sección de Delitos Informáticos y reformas Leyes N.8148, 9048 y 9135 Marco penal contra el cibercrimen, tipifica delitos como el fraude digital y acceso indebido. Delitos complejos como el espionaje, programa maligno, phishing y grooming.

Nota 1: Elaboración propia. Septiembre de 2025.

Nota 2: PGD, se entiende como Procurador de los Derechos Humanos. IAIP, se entiende como Instituto de Acceso a la Información Pública.

5.1. TABLA 4. MARCO LEGAL REPRESIVO SOBRE LAS TELECOMUNICACIONES, TIC Y DATOS PERSONALES

País	Disposiciones represivas	Impacto en Derechos Digitales
Leyes de Telecomunicaciones de El Salvador y Nicaragua, Acuerdo Normativo N. 001-2021 de Nicaragua, Ley de Intervención de las Telecomunicaciones (LEIT) y Ley de Datos Personales de El Salvador		
Nicaragua Ley Convergentes y Normativa de TELCOR	<p>Art. 5 (12): definición de contenido: toda información generada bajo cualquier modo o forma de expresión por medios digitales.</p> <p>Art. 27: revocación de licencias por varias causas tales como no prestar con eficiencia y regularidad los servicios.</p> <p>Art. 110: obligación de suministrar “toda información” que sea requerida por TELCOR incluyendo aquella estadística y georreferenciada.</p> <p>Arts.111-113: supervisión y fiscalización por parte de TELCOR con la capacidad de inspeccionar instalaciones y acceder a cualquier registro cuando sea necesario.</p> <p>Arts. 139-158: se imponen multas, restricciones de funcionamiento y confiscaciones por incumplimiento de la ley</p> <p>Art. 154: facultad de TELCOR de emitir “cualquier” normativa.</p> <p>Art. 3 de la Normativa de TELCOR: obliga a operadores a guardar y suministrar “todos” los datos personales de usuarios.</p>	<p>-Amplia y vaga definición de contenido genera riesgo de censura por parte de TELCOR y autocensura por parte de la ciudadanía ante el temor de represión.</p> <p>-Limitación de operación de proveedores de internet, medios digitales, creadores de contenido por la posibilidad de interrupción de acceso, monitoreo y censura.</p> <p>-Exposición masiva de datos personales sin control judicial y vigilancia de comunicaciones, lo que vulnera el derecho a la privacidad, inviolabilidad de las comunicaciones y la ley 787 de datos personales.</p>
El Salvador, Ley de Telecom., LEIT, y Datos Personales	<p>Art. 30, A de la ley de Telecom.: obliga a los operadores a conservar y entregar toda información requerida por la Fiscalía relativa a datos personales tales como la identidad y foto personal.</p> <p>Art. 35, A de la ley de Telecom.: sanciones con multas de 500 a 1,000 salarios mínimos por incumplimiento.</p> <p>Art. 5 de la LEIT: delitos informáticos y conexos sujetos a la aplicación de la ley.</p> <p>Art. 7 de la LEIT: Fiscalía, autoridad para solicitar la intervención de las comunicaciones.</p> <p>Art. 50 de la Ley de Datos: ACE, ente regulador y sancionador sujeto al presidente de la República.</p> <p>Art. 10 de la Ley de Datos: principio de exactitud puede dar cabida la censura y a sanciones a medios de comunicación.</p>	<p>- Ante la obligación de almacenar datos personales genera el riesgo de vigilancia y vulneración de la privacidad.</p> <p>-Frente a la regulación del sector de las TIC se posibilita el abuso de poder y restricciones a la libertad de expresión.</p> <p>-Se centraliza la toma de decisiones y concentra la autoridad.</p> <p>-Agiliza la intervención, menos margen de análisis, autorización judicial exprés.</p>

Nota: Elaboración propia. Septiembre de 2025.

5.2. TABLA 5. MARCO LEGAL REPRESIVO SOBRE CIBERDELITOS

País	Disposiciones represivas	Impacto en derechos digitales
Ley de Ciberdelitos de Nicaragua y Ley Contra Delitos Informáticos de El Salvador		
Nicaragua	<p>Arts. 1: persecución y sanción de delitos cometidos en las TIC, redes sociales y aplicaciones móviles (apps).</p> <p>Art. 2: ampliación de sujetos responsables, y su aplicación y alcance es extraterritorial.</p> <p>Art. 8: delito por interferir o alterar sistemas informáticos, si son del Estado y servicios públicos van con sanciones de hasta 15 años de prisión</p> <p>Art. 9: delito de alteración, daño a la integridad y disponibilidad de datos. Sanciones de hasta 15 años de prisión.</p> <p>Arts. 10, 12 y 15: delitos por daños a sistemas informáticos, fraude informático y hurto por medios informáticos. Sanciones con prisión de hasta 7 años.</p> <p>Art. 30: delito de propagación de “noticias falsas” a través de las TIC, redes sociales y <i>apps</i>, difusión de información falsa que perjudique el honor e información que incite al odio con penas de prisión de hasta 10 años.</p>	<p>-Aumento del poder estatal en la vigilancia y la obtención de datos e información personal sin garantías procesales ni controles independientes, conlleva un riesgo para la privacidad y la protección de datos personales.</p> <p>-Autocensura masiva de las y los ciudadanos y medios de comunicación debido a la severidad de las penas.</p> <p>-Ampliación del efecto extraterritorial de la ley para perseguir a disidentes en el exterior.</p> <p>-Criminalización de la denuncia, investigación periodística y opiniones ajenas al gobierno mediante figuras como “noticias falsas” con grave afectación a la libertad de expresión en línea.</p> <p>-Riesgos a la libertad de prensa y de expresión mediante la criminalización de actividades en internet, redes sociales y <i>apps</i>.</p>
El Salvador	<p>Arts. 10-12: se tipifican delitos de estafa, fraude y espionaje informático. Se incrementan las sanciones con prisión por hasta 12 años.</p> <p>Art. 22: delito de suplantación de identidad. Sanción con prisión de hasta 10 años</p> <p>Art. 23: delito de obtención y divulgación de información no autorizada por medio de las TIC y datos en sistemas informáticos. Sanción con prisión de hasta 12 años si pone en peligro la seguridad del Estado.</p> <p>Art. 24: delito del uso indebido de datos personales o sensibles. Sanción con prisión de hasta 6 años.</p> <p>Art. 25: delito de obtención y transferencia de información “confidencial”. Sanción con prisión de hasta 8 años.</p> <p>*Las reformas de 2022 y 2025 endurecen sanciones de 10- 12 años de prisión por cometer delitos informáticos.</p>	<p>-Riesgos a la privacidad digital y la protección de datos personales por el uso indebido de la información, de los datos y sistemas informáticos.</p> <p>-Tipificación de manera amplia e imprecisa, penalizando a usuarios de las TIC por obtener o transferir información “confidencial”, lo que permite diversas interpretaciones jurídicas.</p> <p>-Ambigüedad jurídica genera autocensura, riesgo periodístico y de libertad de expresión. Por ejemplo, mediante persecución a periodistas por denuncias de corrupción, gastos públicos, y violaciones de derechos humanos, como lo ocurrido con Ruth López.</p>